

Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

Agréguese a los autos, en lo pertinente, la NOMINA DE BENEFICIARIOS SEPTIEMBRE DE 2023, referida en la Resolución Exenta N° 5540 y enlazada al sitio web <https://junaeb.ceropapel.cl/archivos/2023/09/28/Naomina-Minuta-09Sep---BRI-2023.xlsx>

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO. Que doña María Camila Acuña Díaz, abogada, interpone recurso de protección en favor de doña Gissella Millaray Tripailaf Mamani, en contra del Ministerio de Educación y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de la renovación de las becas indígena y de residencia indígena, que recibía la protegida, vulnerando de este modo las garantías que le asegura el artículo 19 N° 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la protegida es estudiante de medicina, cursando segundo año, en la Universidad de Antofagasta, carrera a la que ingresó luego de haber cursado un Bachillerato en Ciencias en la misma universidad durante el año pasado. Añade que, en el contexto socioeconómico de la protegida, durante el año 2023 obtuvo los beneficios de gratuidad universitaria y las becas de mantención beca indígena y beca de residencia indígena, destacando que estas últimas le permitían costear alojamiento y alimentación, y resultarían determinantes para su estadía en la ciudad.

Aduce que la renovación de las dos becas mencionadas para el año 2024, esto es, la beca indígena y la beca de residencia indígena, fueron rechazadas por JUNAEB a pesar de encontrarse matriculada, ser alumna regular de la carrera de Medicina en la Universidad de Antofagasta y pertenecer a una comunidad indígena, requisitos para la obtención de ambas becas. Refiere que los actos que reclama “fueron notificados a la recurrente con fecha 01 de abril de 2024 mediante llamada telefónica con las recurridas en autos”.

Añade que “la recurrida le habría negado la renovación de ambas becas por haber continuado sus estudios desde el Bachillerato a la respectiva carrera, considerando para el rechazo, erróneamente, que la recurrente estaría cursando una doble carrera cuando en realidad se trata de un programa de continuidad de estudios al interior de la propia Universidad, para



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MNZSXQGLFFW

ingresar desde el programa de Bachillerato en Ciencias a la carrera de medicina en cuestión. Esta interpretación y errónea suposición ha llevado a consecuencias injustas y desproporcionadas, privando a la recurrente de recursos vitales para su subsistencia y bienestar.”.

En cuanto a las garantías invocadas, arguye que el acto arbitrario e ilegal recurrido, ha generado un impacto inmediato y severo en su bienestar económico y emocional, poniendo en riesgo su capacidad para continuar con sus estudios y mantenerse en la ciudad donde cursa su carrera universitaria, afectando su integridad psíquica; mientras que la negación injustificada de las becas también vulnera el derecho de propiedad de la recurrente sobre su educación y su capacidad para acceder a los recursos financieros necesarios para su subsistencia en una ciudad y región distinta a la que pertenece.

Solicita se acoja el presente recurso de protección y que en consecuencia se ordene la aprobación, por quién corresponda, de la renovación de las becas beca indígena y beca de residencia indígena, extendida a favor de la recurrente, o bien, adopte todas las otras medidas necesarias tendientes a restablecer el imperio del Derecho, de acuerdo con los derechos constitucionales cuya tutela se solicita, con costas de los recurridos.

SEGUNDO. Que comparece don Rodrigo Henríquez Figueroa, abogado, en representación de la recurrida Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), quien evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso de protección.

En primer lugar, alega la extemporaneidad del recurso, en atención que la recurrente buscaría impugnar los actos que contienen la decisión que suprimen las becas Indígena y de Residencias Indígenas, haciendo presente que ambas fueron publicadas en distintos actos que producen los efectos que se reclaman.

Señala que en lo que respecta a la supresión de la Beca Indígena, esta consta en resolución exenta N° AP-01164/2023, de fecha **18 de septiembre de 2023**; y en lo que concierne al acto que suprimió la Beca de Residencias Indígenas, esta se dio a conocer por medio de la publicación de la Resolución exenta N° 5540 **del 4 de octubre de 2023**.



Por tanto, asevera que es más que ostensible que el recurso deducido con fecha de ingreso el 10 de abril de 2024, se encuentra, claramente, fuera de plazo

En segundo lugar, alega que el recurso es improcedente, por no buscar la cautela de derechos indubitados. En ese sentido advierte que la vía elegida por la actora para resolver la controversia surgida no es la correcta, toda vez que la litis planteada en autos trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el presente arbitrio, pues se pretende una declaración de derechos.

En tercer lugar, alega que no ha incurrido en acto que haga procedente el recurso. Explica en qué consisten las becas mencionadas en el recurso, dando cuenta que ambos beneficios corresponden a un tipo de subvención estatal que, como todo acto de fomento, se entrega a un cierto número de beneficiarios, siempre y cuando concurren en ellos los requisitos necesarios que le hagan merecedores de su otorgamiento y mantención.

Invoca las normas que otorgan competencia al órgano al efecto, los artículos 1 y 2 de la Ley N° 15.720.

Afirma que su parte actúa de un modo respetuoso con la legalidad imperante, al tomar una decisión debidamente motivada y dentro del marco de sus competencias al tener como principal sustrato en su decisión, el Manual de Asignación de Beneficios, para los Procesos de Postulación y Renovación, aprobado por Resolución Exenta N° 3986-2022 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Apunta que la revisión de los antecedentes de la recurrente fueron examinados conforme al método consagrado en el acápite 10.2 del citado manual, que regula los controles programáticos que hace la institución para verificar la existencia de situaciones específicas que configuren una causal de término con el beneficio estatal, así, para el presente caso, respecto del punto de la duración máxima de la carrera.

Afirma que la autoridad cumplió con su deber de estudiar el asunto de la recurrente, verificando en el transcurso de su análisis, la situación que la misma actora reconoce en su libelo, esto es, que habría realizado un cambio de carrera en la universidad, dando paso a estudios distintos a aquellos que originariamente le permitieron optar por los beneficios que actualmente



reclama. Por tal motivo, es que la autoridad interpretó, acorde de sus facultades, y tomando en cuenta las circunstancias que el manual protocolar prevé, que la pretensión de extender el beneficio de la beca indígena y beca de residencias indígenas a otros estudios distintos a aquellos que posibilitaron su adjudicación, implicaría sobrepasar la duración máxima con la que cuenta la autoridad para brindar dicho apoyo económico.

Junto a lo anterior, destaca que es la autoridad administrativa el órgano competente y calificado para comprobar apropiadamente este tipo de circunstancias de hecho, respondiendo ello, a un asunto de mérito, por significar la interpretación de los elementos fácticos que eventualmente puedan configurar una causal de supresión de beneficio.

Además, refiere que debe ajustarse a los principios de eficiencia y eficacia en dicha actividad distributiva de recursos públicos.

Controvierte la afectación de las garantías invocadas.

Finalmente, bajo el título “DE LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO POR EXISTIR UNA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y FÁCTICA QUE TRABA AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN”, expresa que este tribunal no se encuentra en posibilidad de adoptar medidas adecuadas y oportunidad para restaurar el imperio del derecho, toda vez que la medida que solicita la recurrente, esto es, se declare a su favor la renovación de la beca indígena y beca de residencias indígenas, implicaría a la postre no sólo la declaración de un derecho, sino peor, dicha actitud escondería una invitación a reemplazar la decisión de la autoridad competente, lo que importaría una invasión al espacio de atribuciones de la autoridad administrativa, algo intolerable por el derecho positivo.”

TERCERO. Que doña Pía Grandón Cárdenas, abogada, Jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación, evacúa informe, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone, en síntesis, que la recurrente interpone la acción de protección de marras en contra de la no renovación de la beca indígena y la beca de residencia indígena, cuya asignación y distribución de estas becas no es competencia del Ministerio de Educación, por cuanto no se encuentran dentro de su programa de becas de educación superior.

Indica que dichas becas son asignadas y distribuidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, órgano público descentralizado que,



conforme a lo dispuesto en la Ley N° 15.720, es una corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público. Entre el Ministerio de Educación y la JUNAEB no existe una dependencia jerárquica, ni tampoco se establece en la ley una atribución expresa que le permita incidir en el proceso de asignación de las becas administradas por el mencionado servicio público. En este sentido, aduce que no es dable atribuir al Ministerio actos u omisiones arbitrarios o ilegales, por cuanto no es de su competencia la administración de las becas objeto del recurso.

Agrega que, de acuerdo a la información registrada en el Sistema de Información de la Educación Superior, doña Gissella Millaray Tripailaf Mamani registra matrículas en los años 2021, 2022 y 2023 en la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta. En cuanto al año 2024, la recurrente registra matrícula en la carrera de Medicina de la Universidad de Antofagasta.

CUARTO. Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

QUINTO. Que en cuanto la extemporaneidad alegada, la recurrida afirma que los actos recurridos fueron publicados, en lo que respecta a la supresión de la Beca Indígena, por resolución exenta N° AP-01164/2023, con fecha 18 de diciembre y por resolución exenta N° 5540, el 4 de octubre de 2023.



Sin embargo, las fechas indicadas corresponden a la data de las resoluciones, sin que exista constancia alguna de su publicación efectiva como alega el recurrido.

Que en estrados, la defensa del recurrido expresa también que la publicación se realizó en la página web del organismo, lo que aparece conteste con lo que señalado en el *Manual de asignación de beneficios, para los procesos de postulación y renovación*, acompañado en autos, que en su página 115, Anexo 11: Deberes, obligaciones y derechos de los estudiantes, establece: “k) *Revisar periódicamente el o los portales de autoconsulta que disponga JUNAEB para informarte de estado actual de los programas de Becas y Residencias*”.

SEXTO. Que la Ley N° 19.880, establece en su artículo 45 que “*Los actos administrativos de efectos individuales, deberán ser notificados a los interesados conteniendo su texto íntegro*”; en el artículo 50: “*Los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.*”; y que las formas de dicha notificación son las establecidas en los artículos 46: medios electrónicos, carta certificada o personalmente, según el caso; o por su publicación en el Diario Oficial, en los casos de los artículos 45, inciso final y 47, todos de la misma ley.

Que, como puede observarse de los antecedentes de la causa, ninguno de estos medios fue utilizado por la administración al momento de notificar el rechazo de la renovación de las becas, sino que estableció, al margen de la regulación legal, un sistema de publicación en su página web que impuso a los solicitantes la carga de su revisión. Lo anterior, además, impide establecer una fecha cierta de la notificación o conocimiento por parte de los postulantes de lo así publicado y con ello, también imposibilita la contabilización de los plazos para la interposición de eventuales recursos contra la decisión administrativa.

Que la exigencia de notificación de los actos administrativos se advierte todavía más necesaria, cuando el acto afectare los derechos de los particulares, toda vez que solo desde ese momento, el afectado está en condiciones de conocer fehacientemente el acto gravamen y en consecuencia, ejercer los derechos que le correspondan.



Que por lo mismo, al establecer un sistema de notificación de los actos administrativos, al margen de la ley y que depende, además, de la revisión voluntaria del portal web por parte de los usuarios, lo que impide determinar tanto la fecha efectiva de publicación por el Servicio como la de revisión y notificación por parte de los usuarios, la Administración no está en condiciones de exigir, como lo hace en el recurso, que la notificación se entienda efectuada desde la fecha de datación de los actos cuestionados.

En razón de lo expuesto y atendido que el servicio no ha podido acreditar la fecha efectiva en que notició los actos a la recurrente, deberá estarse al alegato de ésta, que data el conocimiento efectivo del acto agravante el 1 abril de 2024, detallando en estrados que lo fue por la llamada telefónica de la asistente social de la universidad que la impuso de la situación de no renovación de sus becas, lo que conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880 constituye su notificación tácita, de manera que el recurso interpuesto el 10 de abril lo ha sido dentro de plazo, razón por lo cual se rechazará la extemporaneidad alegada por la recurrida.

SÉPTIMO. Que en cuanto los motivos del rechazo de la Beca Indígena, en la resolución exenta N° AP-01164/2023, la recurrente aparece en el Nro 32, consignado a su respecto que “ESTUDIANTE NO CUMPLE REQUISITO PARA MANTENCIÓN DEL BENEFICIO”; y en cuanto a la Beca Residencias, la resolución exenta N° 5540, remite a un enlace web que refiere como la NOMINA DE BENEFICIARIOS SEPTIEMBRE DE 2023, que a su vez, corresponde a un archivo Excel, en que en la hoja “Suprimido”, bajo el Nro 39, se consigna a la recurrente y en la columna Resultados, indica: “no cumple requisitos”.

OCTAVO. Que así las cosas, ha de tenerse especialmente en consideración, el deber de fundamentación de los actos que pesa sobre la Administración, delineado por la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, en los artículos 11 y 41, en que el primero citado, dispone que “Los hechos y fundamentos de derecho *deberán siempre expresarse* en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares...”. el segundo, en su inciso cuarto, que “Las resoluciones contendrán la decisión, que *será fundada*.”; y también el artículo 16, Principio de Transparencia y de Publicidad: “*El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera que permita y promueva el*



conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.”.

A la luz de estas disposiciones, resulta palmario que el Servicio ha faltado a este deber esencial de motivación de sus actos, toda vez que el rechazo de la renovación de las becas no ofrece fundamento alguno.

En efecto la fórmula “no cumple requisitos”, no constituye motivación alguna, conforme el estándar que exige la ley, que no es otro que el que *permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos* de las decisiones adoptadas.

Que en consecuencia, se advierte que la resolución exenta N° AP-01164/2023, de 18 de diciembre de 2023 y la resolución exenta N° 5540, el 4 de octubre de 2023, incurren en la ilegalidad denunciada, como se declarará en definitiva.

NOVENO. Que en cuanto al fondo del asunto, sólo con oportunidad de este recurso Junaeb ha explicitado que el motivo del rechazo de la renovación de becas (aquello que escuetamente señaló en las resoluciones respectivas como “falta de requisitos”), lo constituiría “...*la situación que la misma actora reconoce en su libelo, esto es, **que habría realizado un cambio de carrera en la universidad**, dando paso a estudios distintos a aquellos que originariamente le permitieron optar por los beneficios que actualmente reclama. Por tal motivo, es que la autoridad interpretó, acorde de sus facultades, y tomando en cuenta las circunstancias que el manual protocolar prevé, que la pretensión de **extender el beneficio** de la beca indígena y beca de residencias indígenas **a otros estudios distintos a aquellos que posibilitaron su adjudicación implicaría sobrepasar la duración máxima** con la que cuenta la autoridad para brindar dicho apoyo económico.”.*

DÉCIMO. Por su parte, la recurrente ha acreditado un Certificado de alumno regular en Bachillerato en Ciencias para el segundo semestre de 2023 y el mismo Certificado como alumno regular de la carrera de Medicina, para el primer semestre de 2024, ambos de la Universidad de Antofagasta.

Con su mérito, se puede advertir que existe una manifiesta continuidad de estudios entre la matrícula en la carrera de Medicina que realiza la recurrente y la matrícula el semestre anterior en el Bachillerato en Ciencias de la misma universidad.



De esta manera, no existe un cambio de carrera de la recurrente, atendido en primer lugar, que el Bachillerato no es una carrera profesional ni título técnico profesional, sino un grado académico *minor*; y en segundo término, que tal calidad le permite el acceso y continuidad de estudios con la carrera de Medicina en la misma Universidad, al punto que la recurrente ha ingresado al segundo año de estudios.

Que lo anterior, no se ve obstaculizado por el alegato de la recurrida en cuanto “implicaría sobrepasar la duración máxima con la que cuenta la autoridad para brindar dicho apoyo económico”, por cuanto dicha duración, corresponde a la carrera propiamente tal que cursa la recurrente, en este caso Medicina, pero que podría haber sido también la duración de cualquiera otra a la cual hubiera podido acceder desde el Programa de Bachillerato, pues en todos los casos, se produce una conversión de la duración del bachillerato a la extensión de la carrera a que finalmente acceden y que es, obviamente, el principal objetivo de esta modalidad de ingreso a la universidad.

Al contrario, asumir como pretende el Servicio, que la duración máxima del beneficio lo sería el plazo de duración de un programa de bachillerato, significaría en la práctica limitar arbitrariamente el beneficio para todos los estudiantes que accedan a una carrera profesional por esta vía a la duración del programa y sin contar con el apoyo para acceder finalmente una carrera profesional, lo que pugna lógicamente con los objetivos del programa de becas universitarias que se trata.

En consecuencia, la interpretación así realizada por el Servicio resulta ilegal al contravenir su propia normativa y también arbitraria, pues no se advierte razón que fundamente y justifique tal decisión, salvo la errónea conceptualización del concepto de carrera universitaria que atribuye al programa de bachillerato.

DÉCIMO PRIMERO. Así las cosas, resulta en definitiva que los actos recurridos resultan ilegales, por infracción a las normas de notificación legal y falta de motivación del acto, contempladas en las disposiciones pertinentes ya citadas de la Ley N° 19.880; y además, arbitrario, pues realiza una interpretación manifiestamente contraria a la normativa legal y reglamentaria que rige el otorgamiento de Becas universitarias por parte del Estado, al atribuir calidad de carrera universitaria a un programa de bachillerato y desconocer con



ello, el derecho de la actora a renovar sus becas para financiar la carrera de Medicina en que está actualmente matriculada, lesionando con ello el derecho de la actora a la igualdad ante la ley, consagrado en el N°2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, pues establece una discriminación respecto de todos los demás beneficiarios de la beca a quienes se le han renovado los beneficios y que al igual que ella, no se han cambiado de carrera, razón por la cual la presente acción cautelar debe ser acogida, en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre la materia y artículos 11, 41, 45 a 47 de la Ley N°18.834, Estatuto Administrativo, **se acoge**, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de Gissella Millaray Tripailaf Mamani y en consecuencia, **se deja sin efecto** lo decidido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) mediante resolución exenta N° AP-01164/2023, de fecha 18 de septiembre de 2023 y Resolución exenta N° 5540 del 4 de octubre de 2023, en lo que concierne a **la supresión de la Beca Indígena y de la Beca de Residencias Indígenas** que era beneficiaria la recurrente; **y en su lugar**, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas **deberá renovar y pagar las becas** referidas a la recurrente, para el año 2024, y considerar, para efectos de la duración del beneficio, la extensión de la carrea de Medicina que la recurrente cursa en la Universidad de Antofagasta.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez estuvo por acoger la acción constitucional intentada en la especie, para el solo efecto de dictarse por la recurrida Junaeb un nuevo pronunciamiento respecto de la solicitud de renovación de becas formulada por la recurrente *-por cierto debidamente fundado-*, teniendo presente para ello que de la revisión del acto impugnado en la especie, surge que el mismo carece de fundamentación, en cuanto no hace alusión alguna a las circunstancias particulares de la protegida, vulnerando con ello lo preceptuado en los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, afectando a su respecto la garantía fundamental de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Redacción del abogado Integrante señor Luis Hernández Olmedo y de la prevención, su autor.

Regístrese, notifíquese y archívese.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MNZSXQLFFW

Protección N° 8.700-2024.

No firma el ministro don Hernán Crisosto Greisse, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso su feriado legal.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MNZSXQGLFFW

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Suplente Fernando Antonio Valderrama M. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a cuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MNZSXQGLFFW